

La democracia entre la utopía y el realismo*

NORBERT LECHNER

FLACSO, Chile

Democracia real, democracia posible

Reflexionar sobre la democracia en América Latina, hoy en día, significa necesariamente una reflexión acerca de la nueva realidad social. Cuando la cuestión de la democracia es planteada en los años setenta, la revaloración de la democracia radica en la oposición a la dictadura. Esta antinomia empero, ya no da cuenta del significado actual de la democracia. Hoy en día, los procesos viables de democratización se encuentran indisolublemente vinculados a los procesos de modernización económica. Por lo demás, esta referencia al bienestar económico y social siempre estuvo presente en la discusión latinoamericana. Si la experiencia autoritaria revela el valor en sí de las instituciones democráticas, la experiencia de los ajustes estructurales, acentuando las desigualdades sociales, señala los límites que las estructuras socioeconómicas ponen al ejercicio de la ciudadanía. Pero no se trata solamente de desigualdades económicas; éstas suelen descansar sobre discriminaciones étnicas y de género. Ahora la demanda de ciudadanía se entreteje con la diversidad de identidades culturales.

En un proceso acelerado de veinte años el contexto de la cuestión democrática en América Latina ha cambiado completamente. Hoy en día, la democracia realmente existente se encuentra determinada por el fin de un ciclo histórico y la reorganización integral de las sociedades latinoamericanas (Calderón y Dos Santos, 1991; Paramio, 1992; Weffort, 1990). El discurso neoliberal es el que mejor ha sabido señalar la restructuración emergente: la dinámica del desarrollo social se desplaza del Estado al mercado, redefiniendo el campo de la política. El desplome de los países socialistas consagra la globalización del régimen capitalista a la vez que fomenta sus tensiones internas. Este vuelco drástico no se restringe al mapa político-económico; involucra también nuestros mapas mentales.

* Este texto fue preparado para el II Encuentro Internacional de Filosofía Política organizado por la RIFP en Segovia del 26 al 30 de abril de 1993.

En resumidas cuentas, estamos en medio de una gran transformación, similar a los procesos de reorganización social en los años veinte y treinta, que nos obliga a repensar —y rehacer— las relaciones entre procesos económicos, formas políticas y pautas culturales.

La situación no puede ser más dramática para la democracia en América Latina. El orden democrático adquiere un reconocimiento, nunca antes tan extensivo en la región, precisamente en el momento mismo en que el cambio radical del contexto modifica el alcance y el sentido de la democracia. Con lo cual, la pregunta por la democracia no puede sino ser una indagación acerca de la democracia posible. ¿De qué manera las transformaciones en curso afectan las condiciones de posibilidad de la democracia en América Latina?

Suponiendo que el realismo político consiste en confrontar el estado de cosas establecido con lo posible y lo deseado (Lechner, 1987), tratemos de acotar el campo de lo posible. Una aproximación a modos viables de democratización en América Latina debe tomar en cuenta al menos tres referentes.

En primer lugar, las posibilidades de la democracia dependen de las dinámicas específicamente políticas. Una vasta literatura sobre los procesos de transición a la democracia ha reseñado los diversos factores involucrados. Generalmente, los enfoques resaltan los aspectos institucionales. De hecho, nuestras democracias suelen caracterizarse por una débil institucionalidad, incapaz de encauzar el ejercicio conflictivo de la ciudadanía. No obstante la relevancia de la «ingeniería institucional» en las estrategias de transición, los actuales procesos de consolidación democrática se encuentran condicionados de manera importante por un elemento nuevo: la transformación de la propia política. En una visión prospectiva llamo la atención sobre los cambios del espacio de la política, cada vez más transnacionalizado, y de los horizontes temporales, cada vez más cortos. Además, está a la vista cómo el nuevo contexto redefine el lugar de la política y redimensiona su campo de competencia. Ello modifica no solamente el papel de los partidos políticos, sino también la forma en que se configuran las identidades colectivas. Todo ello altera el significado de la política y, en resumidas cuentas, nos obliga a repensar cuál es el sentido de la política.

En segundo lugar, las posibilidades de la democracia en América Latina se encuentran condicionadas por los procesos de modernización. El gran desafío de nuestras sociedades radica, sin duda, en armonizar democratización y modernización. Ambos procesos tienden a ser enfocados de manera escindida, privilegiándose generalmente el ajuste de las estructuras productivas y comerciales. A mediano plazo empero, sólo parece viable una estrategia de modernización que considere, junto con las nuevas condiciones de la economía mundial, procesos incluyentes de ciudadanía. Las rebeldías populares que estallan de modo recurrente en las metrópolis de la región, no responden únicamente a motivos económicos, sino también a demandas de buen gobierno. A la inversa, el dinamismo de la modernización en marcha obliga a reorientar el funcionamiento práctico de la democracia. La tradi-

ción populista ya no representa una organización factible de la ciudadanía de cara a las exigencias y oportunidades planteadas por el mercado. En resumen: «Imaginar que la ciudadanía pueda tener plena vigencia sin un esfuerzo efectivo en materia de competitividad resulta, en el decenio de 1990, tan infundado como suponer que la competitividad —necesariamente de carácter sistémico— pueda sostenerse con rezagos importantes en el ámbito de la ciudadanía» (CEPAL, 1992, p. 18).

Un tercer referente ineludible es aquel «ambiente» omnipresente e inasible que llamamos cultura. Nuestra delimitación de lo posible —y de las posibilidades de la democracia— depende finalmente de nuestros mapas cognitivos con los cuales interpretamos la realidad social. En el caso latinoamericano, ello implica asumir las formas híbridas con que una sociedad mestiza concibe la modernización (Calderón y Hopenhayn, 1993) y la historicidad conflictiva en que sociedades tan divididas plantean la ciudadanía (Escalante, 1992). Pero además, implica dar cuenta de los actuales cambios culturales. Presumiendo que nuestras imágenes de la democracia posible y del orden deseado dependen en definitiva de los mapas ideológicos y marcos conceptuales con que ordenamos el mundo, la crisis de tales estructuras mentales afecta directamente los imaginarios colectivos. A mi entender, un rasgo sobresaliente de nuestra época reside en la erosión de estos mapas cognitivos, desestructurando el campo de lo posible y desdibujando la utopía que cristaliza el sentido que imputamos a la democracia.

A continuación abordaré la «condición de posibilidad» de la democracia en un aspecto limitado, pero complejo. Me interesa explorar algunos de los cambios que sufre la política en nuestro tiempo a raíz de las transformaciones socioeconómicas y culturales. Estos cambios son resentidos por los ciudadanos a la luz de cierta imagen de lo que debe ser la política. Ello parece explicar el actual malestar con la política. Sin embargo, esta imagen familiar de la política a su vez se encuentra en disolución. La crisis de los mapas ideológicos y, en general, de los códigos interpretativos señalizan una recomposición: estamos participando de una redefinición del significado de la democracia y, por tanto, de la democracia posible.

La transformación de la política

¿En qué se expresan los cambios de la política institucionalizada? Los cambios, a escala mundial, en el régimen capitalista de acumulación dinamizan la «lógica del mercado», a la vez que redefinen las funciones de la acción estatal. El «Estado desarrollista» que fue característico de América Latina en los años sesenta es reemplazado por un «Estado subsidiario» (una noción poco precisa, pero indicativa de la tendencia predominante) (CEPAL, 1989). Principalmente a través de dos procesos —la privatización de las empresas públicas y la reducción del gasto público— la dinámica del desarrollo social se traslada del Estado al mercado (Garretón y Espinosa, 1992).

Este proceso está vinculado a cambios del clima cultural. No postulo relaciones de causación ni siquiera correlaciones; tan sólo quiero hacer notar una constelación que estimo relevante para comprender la democracia real. La mencionada transformación de la anterior «sociedad estadocéntrica» tiene que ver tanto con cierto agotamiento del Estado de Bienestar y sus mecanismos keynesianos de desarrollo como con la globalización de los circuitos productivos, comerciales, financieros y tecnológicos; pero también tiene que ver con cambios en nuestros horizontes temporales, específicamente el desvanecimiento del futuro. El Estado moderno como símbolo de duración y continuidad intergeneracional se encontraba en sintonía con una cultura orientada hacia el futuro. El futuro concebido como una construcción deliberada, tenía en el poder político su instrumento privilegiado; el primado de la política descansaba en la idea de progreso. Cuando la fe en el progreso se diluye, el sentido de la política queda abierto.

La actual desestructuración del tiempo y cierta apología de un «presente permanente» nos acerca a la experiencia del mercado. El mercado alude ciertamente a un horizonte de futuro, pero bajo forma de oportunidad y riesgo e incluso de especulación; su marco habitual empero es la coyuntura, o sea el afán de cada día. Resumiendo, el mercado plantea desafíos, no objetivos. En consecuencia, una conducta conforme al mercado supone un alto grado de flexibilidad, capaz de responder ágil y decididamente a tales desafíos. Esta perspectiva reorienta también a la política; en lugar de una construcción deliberada del futuro, la política es concebida como manejo de la contingencia.

Cambian los objetivos de la política. La deliberación y decisión de las metas y tareas del desarrollo social deja de formar parte del campo de competencia de la política. La tarea fundamental de la política ya no es la conducción, sino la regulación de los procesos sociales. El a veces abusivo «primado de la política» de antaño se encuentra ahora estrictamente acotado por los equilibrios macroeconómicos. El equilibrio macroeconómico es, más que un indicador, un verdadero principio normativo que fija rigurosos límites a la intervención estatal. De cierto modo, la democracia es retrotraída al ámbito del Estado de Derecho. A la política no le corresponde sino establecer las reglas generales, en cuyo marco los diversos actores compiten libremente. Para resaltar la tendencia, digamos esquemáticamente que la utopía democrática —la comunidad de ciudadanos— es reinterpretada a la luz de la utopía capitalista: el mercado perfecto. La integración del orden colectivo queda entregada a la dinámica del mercado en tanto la política se hace cargo de la integración productiva de los individuos al mercado.

Todo ello no requiere mayores cambios constitucionales. Basta garantizar la autonomía del Banco Central y restringir la ingerencia parlamentaria sobre el gasto público. Por lo demás, las instituciones y los procedimientos de un régimen democrático se mantienen inalterables. Al mismo tiempo, empero, cambia completamente la acción política. Uno de sus ejes principales es el proceso de toma de decisiones. Su antigua referencia a la deliberación ciudadana (Manin, 1985) se

desvanece, no sólo por el histórico predominio de la tecnoburocracia (Agnoli, 1971), sino más bien por la erosión de la autoridad política. La acción política se desarrolla más y más a través de redes políticas (Marin y Mayntz, 1991). Tales redes, formales o informales, articulan un número variable de actores (gubernamentales, políticos, sociales) interesados en determinada materia con el fin de negociar un acuerdo satisfactorio para todos los participantes. La decisión política ya no representa un acto de autoridad (que asume la legitimidad y responsabilidad de tal decisión), sino un acuerdo negociado. Aunque la diferencia puede ser nula en casos concretos, se trata de concepciones muy distintas: hoy en día, la política consiste más en coordinación que en conducción.

Quizás la interpretación sea demasiado benévola con la realidad. La coordinación política, que todavía representa un mecanismo de conducción, en muchos casos resultará demasiado lenta y laboriosa ante las exigencias del momento. De hecho, buena parte de la agenda política obedece a cuestiones coyunturales que exigen decisiones inmediatas. Existe una fuerte presión en favor de un «decisionismo» al margen de la coordinación y cooperación con otros actores (Torre, 1991).

Las transformaciones señaladas, ampliamente conocidas, no dan cuenta de la profundidad de los cambios. Uno de los rasgos más notorios de la actualidad consiste en la extensión del mercado a ámbitos no económicos. Tiene lugar una redefinición de la política. Anteriormente, la referencia a la democracia como un mercado político en que se intercambian bienes (por ejemplo, protección y servicios contra lealtad y votos) hace uso de una analogía. La analogía con el intercambio mercantil facilita la comprensión de ciertos procesos políticos (por ejemplo, el clientelismo), pero sin borrar la diferencia entre economía y política. El límite se desdibuja cuando el discurso neoliberal del *public choice* pretende explícitamente extender la racionalidad del mercado al campo político (Buchanan, 1980). El llamado a un «imperialismo económico» tiene éxito, aunque con resultados imprevistos. En lugar de una mayor libertad de elección del ciudadano y una mayor transparencia de las decisiones políticas, la entronización de la racionalidad económica significa primordialmente la consagración de criterios mercantiles en la política: el dinero, la competencia, el éxito individual. Cambia el estilo político y el tradicional *ethos* de la política como servicio público deviene obsoleto. La corrupción merecería un análisis más profundo en este contexto.

Hoy en día se acentúa el declive del hombre público (Sennett, 1978). La idea liberal de democracia convoca a individuos libres e iguales que, sin consideración de sus atributos e intereses privados, deciden sobre los asuntos de la *res publica*. Es decir, la democracia opera como la instancia privilegiada de coordinación de la vida social, paralela a las funciones coordinadoras que efectúa el mercado para los individuos en tanto propietarios privados. El actual avance del mercado significa fortalecer el ámbito de la coordinación entre privados, recortando el espacio público. Asuntos que antes eran materia de compe-

tencia de la política, ahora son privatizados. El ejemplo más ilustrativo de tal restricción de la competencia política son las privatizaciones de los servicios públicos. Se trata de una forma de expropiación de lo público. Igualmente indicativo del debilitamiento de lo público es el auge de la corrupción y el tráfico de influencias —formas ocultas de privatización—. Independientemente del juicio legal y moral, cabe destacar en estos casos la irrupción de negocios privados en el seno mismo de la política.

Hay buenos argumentos en favor del mercado; uno de los más esgrimidos es su eficiencia en el uso de los recursos. En nuestro contexto podemos reformular el argumento en el siguiente sentido: el consumidor tiene un mejor control sobre la calidad del bien requerido que el ciudadano porque el mercado ofrece la libertad de elegir —siempre que el consumidor tenga dinero—. En realidad, el ciudadano dispone de mecanismos de control de calidad, pero diferidos en el tiempo: la participación en la gestión pública, el voto y el reclamo público. Su incidencia efectiva es escasa, dejando al ciudadano indefenso. La cuestión radicaría pues en mejorar las capacidades ciudadanas de control. De hecho, existe una preocupación por la gestión pública, pero principalmente en términos productivos, de fomento a los mecanismos de mercado; no en relación al ciudadano. La referencia a la comunidad de ciudadanos se debilita y con ella la especificidad de la política. Una buena ilustración es la discusión sobre la privatización; los servicios de educación y salud son evaluados en función de su eficiencia y productividad económica, no valorados como bienes públicos. La noción de bien público se diluye, la referencia al orden colectivo deviene vacua.

El avance del mercado redefine el campo de la política. Mas esta resignificación no depende solamente de la dinámica económica. Ella expresa, por sobre todo, un cambio de nuestros mapas mentales.

Uno de los cambios más profundos de la política proviene de las transformaciones culturales, específicamente el auge de la cultura audiovisual. Vivimos en una cultura de la imagen, cuyo espacio privilegiado es la televisión. Con el acceso masivo a la televisión, la imagen desplaza a la palabra y ello afecta la política cuyos soportes tradicionales fueron precisamente el discurso y la lectura. ¿Qué hace la televisión con la política? (Landi, 1992). Por una parte, produce una escisión entre la representación institucional y la representación simbólica de la política. La televisión escenifica la política acorde a sus reglas, modificando el carácter del espacio público. Por otra parte, produce una nueva mirada a la política. El proceso comunicativo en que se fija la agenda política, se constituyen los actores, se fijan las expectativas, descansa más y más sobre imágenes. Usando un lenguaje audiovisual, el *look* del político puede crear mayor credibilidad que un buen argumento. Mas la imagen es siempre ambigua, abierta a múltiples lecturas; requiere un anclaje que fije el mensaje. Aun así, la política llevada a la pantalla depende del contexto: el significado resulta fragmentado y recompuesto a través de la secuencia de imágenes como del contex-

to cotidiano del espectador. Las denuncias habituales de la manipulación no dan cuenta del fenómeno. El medio televisivo está modificando tanto la actividad política como la percepción ciudadana. La política se refracta en múltiples voces y desde múltiples imágenes se construye la opinión política.

La ambivalencia de lo político

Una apreciación esquemática de los resultados de las encuestas de opinión pública permite postular que, independientemente de cuan satisfactorio funcione el régimen democrático, actualmente existe una adhesión mayoritaria a la democracia y una falta de confianza en los políticos y en los partidos políticos. Cabe agregar que probablemente en ningún país y en ninguna época ellos gozaron de buena fama, aun siendo reconocidos como legítimos representantes. ¿Cuáles son entonces las razones para el malestar actual con la política?

A mi entender, conviene distinguir dos aspectos. Por un lado, existe un descontento producto de la distancia entre la realidad y la utopía. El ciudadano evalúa críticamente los cambios en la política desde el punto de vista de la imagen transmitida de lo que debe ser la política. Por el otro, también la cultura política está cambiando. Las transformaciones culturales afectan no sólo a la política institucionalizada, según vimos; también modifican la experiencia cotidiana del ciudadano y la imagen que se hace de la política. El malestar expresa simultáneamente una crítica y una renovación. Veamos primero su dimensión crítica.

El malestar se manifiesta en una falta de confianza en la política. Una de las razones de tal desconfianza radica en que la política ya no controla los procesos sociales. La ciudadanía se ve acosada de modo directo o audiovisual por un sinnúmero de problemas —desde el desempleo hasta la guerra pasando por la contaminación y la delincuencia— cuya solución atribuye a la política al mismo tiempo que no goza ningún éxito o ventaja que adjudique a la política. Las cosas están fuera de control: se trata de un fracaso de la política en la medida en que, de hecho, se imputa a la política un poder de control sobre la realidad social. Tal imputación no se justifica considerando el retraimiento de la política, la subsidiaridad del Estado, el reconocimiento de la iniciativa privada y de las fuerzas del mercado. Sin embargo, señala la persistencia de una cultura política que sigue creyendo en el primado de la política. Ello se muestra igualmente en otro aspecto.

Entre aquellas «evidencias» básicas, apenas explicitadas por obvias, que conforman el núcleo de la cultura política, se encuentra probablemente la imagen de la política como instancia máxima de conducción y protección. La gente espera que la política la proteja ante los avatares del destino; le garantiza no sólo la integridad física y una seguridad económica, sino también un marco de certidumbre. Ante un presente azaroso y finalmente fútil, la política encarna una

promesa de continuidad; la política debe procurar que la vida dure. En este sentido, la demanda banal de estabilidad política expresa un interés vital: la sobrevivencia de la comunidad. Por otra parte, la gente espera de la política conducción; la política consiste principalmente en decidir qué hacer acerca de lo probable y lo posible. Para el sentido común la política es por encima de todo proyecto de futuro, el diseño de un horizonte por referencia al cual se hace inteligible el presente.

A partir de este trasfondo cultural la política actual, restringida a la contingencia, resulta frustrante. Sin expectativas de futuro que acoten el campo de lo probable y lo posible, el devenir se vuelve incalculable. A la falta de previsión se agrega la ausencia de esperanza; sin referencia a un mañana mejor los sacrificios actuales pierden sentido. La política así jibarizada se vuelve angustiante, pues traslada toda la incertidumbre al individuo. Solo, sin marco de referencia, el individuo ha de tomar las decisiones y asumir los riesgos. Por tanto, ya no puede diferir deseos y temores en el tiempo; la infinitud de la realidad se concentra en lo inmediato. El ciudadano abrumado termina abominando o despreciando a la política —supuesta instancia de protección y conducción— que le ha traicionado.

El individuo extiende sus campos de acción, gana mayor libertad. Pero también siente cómo se agigantan sus responsabilidades y preocupaciones individuales, sin que la política se haga cargo de ellas. A partir de su experiencia de aislamiento e indefensión, el ciudadano percibe la política como actividad auto-referida. Le cuesta visualizar mediaciones entre su situación personal y un debate político-legislativo cada vez más absorbido por «cuestiones técnicas». La agenda política no sólo ve reducido el campo de lo que serían «cuestiones políticas», sino que además incrementada su distancia con la experiencia ciudadana. En consecuencia, tiende a volatilizarse la responsabilidad política. La democracia tiene dificultades crecientes de responder al ciudadano porque, en el fondo, se ha vuelto incierto de qué es responsable.

Ocurre una desidentificación ciudadana con los partidos políticos. Como resultado de su creciente burocratización (Offe, 1988) y, por encima de todo, de las profundas transformaciones al nivel mundial (Paramio, 1993), los partidos políticos ya no ofrecen a la ciudadanía códigos interpretativos que le permitan estructurar sus intereses y valores, sus preferencias y miedos, en identidades colectivas. Hay una crisis de los mapas político-ideológicos que deja a los partidos políticos sin discurso y a los ciudadanos sin aquellas pautas interpretativas con las cuales ordenaban los procesos sociales y su lugar en ellos. Esta crisis de representación replantea la pregunta acerca de lo posible y lo deseable. Se trata de un proceso lleno de vacilaciones. Por parte de los partidos políticos se mezcla la defensa acérrima de viejas señas de identidad con la reformulación de objetivos y estrategias acordes a la nueva realidad. Similar ambivalencia caracteriza la experiencia ciudadana, donde una imagen familiar de la política convive con tendencias emergentes.

Podemos explicarnos el malestar con la política por una disonancia entre la política tal cual es percibida por el ciudadano y su imagen de lo que ella debería ser. El descontento remite a un criterio de juicio con el cual se evalúa la realidad. Los diversos síntomas de malestar —la falta de confianza, el sentimiento de incertidumbre y abandono, la percepción de indecisión, la desidentificación con los partidos políticos— señalan ausencias que, de modo invertido, configuran un imaginario colectivo. De la política se espera conducción, protección, responsabilidad, claves interpretativas, o sea un conjunto de expectativas que expresan demandas de buen gobierno. Tales demandas descansan sobre ciertas premisas o principios a priori: las utopías (Hinkelammert, 1984; Lechner, 1986).

Todo orden colectivo descansa sobre un principio a priori o mito fundador por el cual un grupo social se constituye como comunidad. Esta utopía que se hace la comunidad de sí misma se despliega a través de distintas formulaciones históricas. Una de ellas es la democracia: la comunidad de ciudadanos. Su significado no está fijado de una vez para siempre. Las utopías son construcciones históricas, cuya vigencia depende de su reproducción en el tiempo. Este proceso de reproducción se encuentra en entredicho. Cierta idea de comunidad se está agotando a la vez que se inicia la búsqueda de una nueva concepción de la comunidad de ciudadanos (Lechner, 1991).

Una de las características de nuestra época es la rapidez con que las experiencias del pasado se vuelven obsoletas e inútiles para enfrentar los retos del presente. Este desgaste acelerado también consume a los imaginarios colectivos y, en concreto, la imagen de la política. Junto con la disolución de nuestra imagen familiar coexiste un proceso de renovación, proceso necesariamente lento y confuso que todavía no cristaliza en una imagen nueva. Esta transición subyace, a mi entender, al actual malestar con la política.

Una impresión superficial que ignora la historicidad, puede confundir este malestar con una despolitización; los ciudadanos se estarían retirando de la política en la medida en que ella no responde o contradice abiertamente las expectativas que se hace la ciudadanía. De asumir tal hipótesis, la superación de la desafección ciudadana supondría retrotraer los cambios de la política, ajustándola a los criterios prevalecientes de la ciudadanía. Esta conclusión me parece insatisfactoria por dos razones: por un lado, los cambios de la política institucionalizada, arriba señalados, no parecen ser cambios discrecionales que dependen de la (buena o mala) voluntad de los actores involucrados. Señalizan tendencias de largo plazo que se relacionan con las transformaciones socioeconómicas, pero también con transformaciones culturales. Por otro lado, parece existir una erosión generalizada de los mapas cognitivos, incluyendo una crisis de aquellas ideas de comunidad y futuro que han conformado nuestra imagen de la política.

El actual clima cultural es ciertamente poco propicio para la política. Nos encontramos en un período de transición, caracterizado por la ambivalencia.

Una opción consiste en aferrarnos a la imagen «clásica» de la política y denunciar las desviaciones en curso. Otra reside en acompañar al proceso contribuyendo a reformular una nueva imagen de la política. Esta opción me parece más fructífera. A mi entender tiene lugar un desplazamiento de lo político y conviene explorar los nuevos límites (Maier, 1987).

Aún no ha llegado la hora de sistematizar y conceptualizar las tendencias emergentes. Por ahora debemos limitarnos a describir fragmentariamente algunos «signos del tiempo» que señalizan la redefinición del realismo político (¿qué es posible?) y de la utopía democrática (el sentido de la política).

1) En primer lugar, llamo la atención sobre la ya mencionada crisis de los mapas ideológicos con los cuales interpretábamos la realidad social. Después de la polarización ideológica de los años sesenta hemos saludado el declive de las ideologías como un signo de realismo. En lugar de reducir la realidad a un esquema prefabricado se asume la complejidad social; mas la mayor información no conlleva mejor interpretación. Las ideologías operaban como mecanismos de reducción de complejidad que facilitaban estructurar límites y clivajes sociales y establecer prioridades y preferencias. Al diluirse las coordenadas categoriales, se amplía el rango de lo posible, pero al precio de debilitar lo deseable. Con el declive de las ideologías se pierde la referencia a un enemigo por oposición al cual se definen no sólo el campo de posibilidades, sino también las propias preferencias. El derrumbe del muro de Berlín representa el colapso de un eje de estructuración; eliminado el enemigo, se desdibujan los límites de lo propio. Estalla el elogio de las diferencias, pero sin constituir un «orden de distinciones». La invocación del pluralismo supone una unidad que falta reformular. En su ausencia, la diversidad se manifiesta como fragmentación. Tanto las sociedades latinoamericanas como las europeas se caracterizan hoy en día por la disolución de un horizonte cultural común en subculturas segmentadas.

La erosión de los mapas ideológicos debilita las estructuras de comunicación y, por tanto, las relaciones entre los ciudadanos y la política. Los partidos políticos no logran agregar los múltiples intereses segmentados y sensibilidades fragmentadas, reemplazando opciones programáticas por liderazgos personales. Salvo las grandes decisiones, fijadas en programas electorales, la política deviene imprevisible para el ciudadano. Ello provoca desafección, pero también despierta iniciativas ciudadanas. Un instrumento privilegiado de previsión es el derecho, y resulta notorio el nuevo protagonismo de los tribunales de justicia, donde las reivindicaciones políticas aparecen traducidas en demandas judiciales. Tal «juridificación» de la política no es saludable, pues sobrecarga un Poder Judicial no preparado y distorsiona la separación de poderes. No obstante, expresa una forma de autodefensa de la comunidad ciudadana.

2) El desorden cultural puede estar anunciando una segunda secularización. La primera secularización es llevada a cabo por la sociedad moderna cuando asume explícitamente instituir el orden social, regulando por sí misma la

convivencia social. El avance de la secularización, sometiendo todo valor y toda norma a crítica y sospecha, que dio lugar a la democracia, termina cuestionando su base cultural. La idea clásica de la democracia presupone una comunidad de valores y creencias compartidas, que la actual fragmentación pone en entredicho (Germani, 1985).

En algunos países la ausencia de cohesión cultural proviene de la diversidad étnica; en otros, como Chile, me parece más relevante el proceso de privatización que acompaña al avance del mercado. Llama la atención la «informalización» de la acción colectiva en beneficio de un acomodo individual a las oportunidades y dificultades del entorno. Ocurre un proceso de individualización en oposición expresa a la vida colectiva, reducida a sentimientos de grupo o tribu. El cálculo utilitarista fomenta actitudes racionales y creativas en el ámbito individual, pero irresponsables respecto a los bienes públicos. El espacio público se identifica con el mercado y el espectáculo, o sea como parte del mundo privado. Tal privatización ocurre también con la ética; persisten las opciones éticas individuales, pero sin reconocer normas sociales.

Todo ello cuestiona la idea de comunidad cultural que subyace a la ciudadanía. Mas no significa el término de cualquier noción de comunidad. Más fructífera que los diagnósticos catastrofistas me parece ser la exploración de los cambios en curso para auscultar en la redefinición de lo público y lo privado la posible constitución de la comunidad de ciudadanos.

BIBLIOGRAFÍA

- AGNOLI, J., y P. BINCKNER: *La transformación de la democracia*, México, Siglo XXI, 1971.
- BUCHANAN, James: «De las preferencias privadas a una filosofía del sector público», *Estudios Públicos* (Santiago), n.º 1 (1980).
- CALDERÓN, Fernando, y M. DOS SANTOS: *Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis sociopolíticas y un corolario*, Santiago de Chile, FCE, 1991.
- , y M. HOPEÑHAYN: *¿Existe desarrollo sin identidad?*, CEPAL, 1993 (manuscrito).
- CEPAL: *Rol del Estado. Bibliografía 1975-1989*, Santiago, Biblioteca CEPAL, 1989.
- : *Educación y conocimiento - eje de la transformación productiva con equidad*, Santiago, 1992.
- ESCALANTE, Fernando: *Ciudadanos imaginarios*, El Colegio de México, 1992.
- GARRETÓN, Manuel A., y M. ESPINOSA: *¿Reformas del Estado o cambio en la matriz sociopolítica?*, Santiago, FLACSO, Serie Estudios Sociales, n.º 30, agosto 1992.
- GERMANI, Gino: «Democracia y autoritarismo en la sociedad moderna», en VV.AA., *Los límites de la democracia*, Buenos Aires, FLACSO, 1985.
- HINKELAMMERT, Franz: *Crítica o la razón utópica*, Costa Rica, Departamento Ecueménico de Investigación, 1984.
- LANDI, Óscar: *Devórame otra vez*, Buenos Aires, Planeta, 1992.
- LECHNER, Norbert: *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado*, Madrid, CIS / Siglo XXI, 1986, cap. VI: «El consenso como estrategia y como utopía».
- (ed.): *¿Qué es el realismo político?*, Buenos Aires, Catálogos, 1987.

- LECHNER, Norbert: «The search for lost community. Challengers to democracy in Latin America», *International Social Science Journal* (UNESCO), n.º 129 (1991).
- MAIER, Charles (ed.): *Changing boundaries of the political*, Cambridge University Press, 1987.
- MANIN, Bernard: «Volanté générale ou délibération?», *Le Débat* (París), n.º 33 (enero 1985).
- MARÍN, Bend, y R. MAYNTZ (eds.): *Policy Networks*, Compus / Westview Press, 1991.
- OFFE, Claus: *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*, Madrid, Sistema, 1988.
- PARAMIO, Ludolfo: *Problemas de la consolidación democrática en América Latina en la década de los 90*, Santiago, FLACSO, Serie Contribuciones, n.º 78, mayo 1992.
- : «Democracia, política, neoliberalismo», *Etcétera* (México), n.º 1 (febrero 1993).
- SENNET, Richard: *El declive del hombre público*, Barcelona, Península, 1978.
- TORRE, Juan Carlos: *América Latina, el gobierno de la transición en tiempos difíciles*, Buenos Aires, Instituto Di Tella, 1991 (manuscrito).
- WEFFORT, Francisco: «La América equivocada», en Julio Cotler (comp.), *Estrategias para el desarrollo de la democracia*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1990.

Norbert Lechner es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en su programa de Chile y autor de algunos libros como «Estado y política en América Latina» (3.ª ed., 1983) y «Los patios interiores de la democracia: subjetividad y política» (2.ª ed., 1990).